Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
http://www.juridicas.unam.mx/ https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/

Problematización sobre las barreras del esquema de Seguridad Social para las personas con discapacidad en México

Marina Guadalupe Sol Juraz
Universidad de Guadalajara

De acuerdo con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006) una persona discapacitada es aquella que tenga deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras [externas o sociales][1], puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Esto quiere decir que un gran número de personas puede incluirse dentro de dicha definición, sin embargo, no es intención del presente artículo encerrar en conceptos a seres humanos, únicamente se pretende hablar de una de las barreras aparentemente invisibles a las que se enfrentan las personas con discapacidad, esto es el acceso a la seguridad social.

Según el Censo de Población 2010, en México un total de 5 millones 739 mil 270 habitantes del país presentaban discapacidad. Es decir, estas personas no pueden o tienen mucha dificultad para hacer alguna de las ocho actividades evaluadas: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y problemas emocionales o mentales (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2010). Según el Censo del año 2020 esta población es de 6 millones 179 mil 890 personas considerando únicamente aquellas que no pueden o tienen mucha dificultad para hacer las actividades mencionadas, pues si agregamos a aquellas que realizan esas actividades con poca dificultad habría que contemplar 13 millones 934 mil 448 personas más dando

[1] El texto entre corchete no forma parte de la redacción de la convención, fue agregado por la autora del presente artículo.

CC 4.0 2021. Academia Interamericana de Derechos Humanos
https://www.academiaidh.org.mx/revista-akademia

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
http://www.juridicas.unam.mx/ https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/

un total de 20 millones 836 mil 108 personas (Instituto Nacional de Estadística y geografía 2021).

El incremento en el número de personas contempladas en los censos de población puede ser consecuencia del mejor entendimiento de lo que hoy en día se conoce como discapacidad ya que el marco conceptual que establece la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad se introdujo en el año 2006 y permitió visibilizar todas esas barreras sociales a las que se enfrentan las personas por condiciones motrices, visuales, auditivas, sensoriales y mentales, es decir, no todas las discapacidades se experimentan de la misma forma ni intensidad.

Ahora bien, lo primero que nos interesa saber son las siguientes cuestiones: ¿es posible saber cuántas de estas personas tienen garantizado el acceso a su derecho a la seguridad social? ¿Cuántos de ellos tienen empleos y si estos empleos son formales o informales? ¿Tienen garantizado sus derechos a la asistencia y el cuidado? Comencemos a buscar respuestas.

En materia de seguridad social, México cuenta con un marco jurídico que empieza por el artículo 123 de la Constitución Política del país y sigue con la Ley del Seguro social y la Ley Federal del Trabajo. El apartado a) del citado artículo constitucional hace referencia a los derechos de las y los trabajadores en general y el apartado b) a las y los trabajadores al servicio del Estado. Ambos tipos de trabajo debe tener garantizado el acceso a la seguridad social, para ello, se crearon dos instituciones: el Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), aunque también se permiten esquemas de seguridad social independientes, siempre y cuando respeten o superen las prestaciones que la ley demanda. Aquí nos centraremos en lo estipulado para los trabajadores en general, pues abarca el mayor número de habitantes, además ambas instituciones comparten un cuadro básico de prestaciones de seguridad social.

CC 4.0 2021. Academia Interamericana de Derechos Humanos
https://www.academiaidh.org.mx/revista-akademia

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
http://www.juridicas.unam.mx/ https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/

Así pues, la constitución nos dice que:

> "Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares"[2].

Ahora bien, de acuerdo con el segundo artículo de la Ley de Seguridad Social, esta tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

La seguridad social en México comprende un régimen obligatorio para trabajadores asalariados y uno voluntario para todas las familias de México que requieran cobertura de salud, además podrán inscribirse voluntariamente al régimen obligatorio las y los trabajadores por cuenta propia que deseen cobertura, así pues la seguridad social puede ser comprendida como un derecho que forma parte del derecho al trabajo, pero en realidad debe ser garantizada para todas las familias mexicanas pues se utiliza como una herramienta para garantizar el acceso a un núcleo básico de derechos humanos como son la salud, el nivel de vida adecuado y la dignidad de las personas.

Los seguros del régimen obligatorio son 5: Riesgo de trabajo; enfermedad y maternidad; invalidez y vida; Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y Guarderías y prestaciones sociales.

[2] Art 123, A) fracción XXIX. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CC 4.0 2021. Academia Interamericana de Derechos Humanos
https://www.academiaidh.org.mx/revista-akademia

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
http://www.juridicas.unam.mx/ https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/

Este artículo centra atención específicamente en esas luchas por los derechos de la seguridad social de un grupo de trabajadores y trabajadoras: las personas con discapacidad.

Comencemos con las personas con discapacidad que hoy en día, tienen acceso en México a servicios médicos. De acuerdo con el censo de población 2020 la afiliación a servicios de salud a Nivel Nacional de personas con discapacidad es el siguiente:

Cuadro de afiliación a servicios de salud para las personas con discapacidad en México[3]			
Total de personas	Afiliadas	No afiliadas	No especificado
6´179,890	4´703,057	1´474,811	2,022
Mujeres discapacitadas	Afiliadas	No afiliadas	No especificado
3´275,692	2´538,944	735,876	872
Hombres discapacitados	Afiliados	No Afiliados	No especificado
2´904,198	2´164, 113	738,935	1,150

De la información presentada se desprende que más de un millón de personas discapacitadas no están afiliadas a servicios de salud pública. Aquí viene a bien aclarar que bien pudiera ser que estas personas no gocen del servicio debido al desempleo, trabajos informales o precarios o a que no obtengan dichos servicios del sector público. Además, se desconoce el origen de afiliación de los otros cuatro millones de personas, es decir, si forman parte de un régimen obligatorio, voluntario o si son beneficiarios.

Según la encuesta Nacional Sobre Discriminación 2017 las personas con discapacidad de 6 años en adelante utiliza principalmente los servicios médicos de la siguiente manera:

[3] Cuadro de elaboración propia a partir de los datos del Censo Nacional de Vivienda y Población 2020 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2021).

CC 4.0 2021. Academia Interamericana de Derechos Humanos
https://www.academiaidh.org.mx/revista-akademia

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
http://www.juridicas.unam.mx/ https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/

Porcentaje de población %	Servicio de salud[4]
38.4	Seguro Popular[5]
39.8	Imss, Issste, Pemex y Ejército Nacional o Marina
12.4	Sector privado
7.4	Consultorio de farmacia (privado informal)
1.5	No recibe atención

Esto quiere decir, que, si aproximadamente el 40% de personas con discapacidad se atiende mediante el seguro proporcionado por la fuente laboral, es decir Imss, Issste, Pemex y Ejército Nacional o Marina, también deben tener acceso a un cuadro básico de prestaciones, que como se plantea a lo largo de este documento no es el adecuado para sus necesidades.

En cuanto a las prestaciones en especie, es decir, el acceso a la pensión, el Instituto Mexicano del Seguro Social reporta que hasta el mes de octubre del año 2020 el número de pensionados vigentes por incapacidad parcial era de 247,000 y por incapacidad total la cantidad es de 9,717. ¿se puede interpretar que todas estas personas tienen una discapacidad? Antes que nada, es preciso decir que no se pretende equiparar ninguna forma de discapacidad con el término de invalidez, pues el mero término es un atentado en contra de la dignidad de las personas ya que no existen personas cuyo valor pueda ser anulado, mucho menos si el parámetro que se utiliza es el de la capacidad para desempeñar una actividad laboral, pues las personas valemos por nuestra sola existencia y, además, somos sujetos de derecho por el simple hecho de vivir en sociedad.

[4] Cuadro de elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2014).
[5] Cabe aclarar que en la actualidad el seguro popular ya no existe.

CC 4.0 2021. Academia Interamericana de Derechos Humanos
https://www.academiaidh.org.mx/revista-akademia

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
http://www.juridicas.unam.mx/ https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/

A pesar que la palabra invalidez aún se utiliza en la constitución, tal redacción va encaminada a proteger a la persona de todos los abusos que hasta ese momento había cometido el capital en su contra. Recordemos que la constitución vigente fue escrita en un momento post revolución mexicana y antes de que el pueblo se alzara en armas, imperaba una opresión gigantesca sobre la clase trabajadora, en su mayoría de origen campesino-indígena, a través de la empresa de la esclavitud que le ayudó a políticos y hacendados de Heineken, azúcar y algodón a acumular grandes cantidades de capital a costa del cuerpo, vida y sangre de nuestro pueblo (Turner 2014).

En consecuencia, la invalidez no era un término que estuviera en disputa pues se pensaba como una prestación que asegurara el sustento de una persona en caso de sufrir un padecimiento que ya no le permitiera trabajar, así pues el esquema del derecho mexicano gira en torno al concepto de incapacidad o invalidez [para el trabajo], y el Estado está obligado a proporcionar una pensión por invalidez y también en caso de enfermedad para cuando las personas sufran alguna condición médica que les impida realizar su actividad laboral. Estas pensiones pueden ser temporales o permanentes. Muchas de las personas que sufren discapacidad severa, quedan imposibilitadas para desempeñar un trabajo, otras requieren modificar su actividad laboral y/o adaptarla para poder continuar ejerciéndola. Por eso, tener prestaciones de seguridad social se vuelve relevante ante la discapacidad, pues se presume que estas personas requieren asistencia médica, cuidados y prestaciones en especie y en dinero que les permitan acceder a una vida digna.

Es importante aclarar que la Ley del Seguro social exige para el pago de pensión por invalidez que la persona no "padezca un estado de invalidez anterior a su afiliación al régimen obligatorio"[6].

[6] Artículo 123 de la Ley del Seguro social: No se tiene derecho a disfrutar de pensión de invalidez, cuando el asegurado: I. Por sí o de acuerdo con otra persona se haya provocado intencionalmente la invalidez; II. Resulte responsable del delito intencional que originó la invalidez, y III. Padezca un estado de invalidez

CC 4.0 2021. Academia Interamericana de Derechos Humanos
https://www.academiaidh.org.mx/revista-akademia

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
http://www.juridicas.unam.mx/ https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/

Así que, la invalidez y la discapacidad son figuras totalmente distintas, pero que pueden estar relacionadas si es que la persona adquiere una discapacidad posterior a incorporarse a un régimen de seguro social.

Otra prestación es el retiro, es decir, después de ciertos años cumplidos de trabajo la persona suspende la actividad laboral y se hace acreedora de una prestación económica por los años de trabajo. Otra prestación es la de asegurar el servicio médico y de pensión en caso de defunción a familiares, es decir tener beneficiarios. Está claro que estas prestaciones deben de estar garantizadas para todas las personas incluidas aquellas con discapacidad, pero creo que debe haber adecuaciones para que estas últimas puedan ejercer mejor sus derechos.

La primera adecuación debería de ser la que hace referencia a los montos de las pensiones y es que, para adquirir una pensión por invalidez una persona debe haber cotizado 250 semanas o 150 semanas para los casos en que la invalidez sea del 75% o más[7]. Es decir, alrededor de 5 años en el primer caso y 3 años para el segundo. Si cumples con ese requisito, entonces el Instituto promedia el salario de cotización de las últimas 500 semanas, si es que las hay, si no de las 250 o 150 semanas, según sea el caso y de la cantidad resultante calcula el 35% para obtener la cuantía de la pensión.

La sola idea de disminuir el 65% del promedio de salario base para una persona cuyo padecimiento seguramente incrementará sus necesidades para tener una vida digna es cuestionable si no es que injusta, aún más real se percibe cuando obtenemos cantidades líquidas. ¿de dónde se sacó la idea de que al padecer una discapacidad las necesidades financieras de una persona disminuyen hasta en el 65%?

anterior a su afiliación al régimen obligatorio.

[7] Tal porcentaje se refiere a las limitaciones físicas o mentales que padece la persona para realizar la actividad laboral.

CC 4.0 2021. Academia Interamericana de Derechos Humanos
https://www.academiaidh.org.mx/revista-akademia

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
http://www.juridicas.unam.mx/ https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/

Claro está que no todas las personas cotizan con el mínimo, ni están sujetas a este régimen pues la Ley del Seguro Social de 1973 manejaba otros porcentajes, sin embargo, en ambos regímenes se maneja bajo la premisa de que todas las discapacidades: total, parcial, permanente o temporal requieren una disminución del ingreso de la persona. Esto, quizá, porque no están pensados bajo el marco de proporcionalidad y necesidad que exige cualquier perspectiva basada en los derechos humanos de las personas, sino que más se conciben como una concesión del capital hacia la fuerza de trabajo que ya no le es útil.

Viendo las cosas de esta manera vendría bien preguntarse si las personas que por enfermedad general caen en una situación de discapacidad pasan por un proceso de empobrecimiento que genera una discriminación por razón de su discapacidad. La respuesta parece evidente, sin embargo, para entender bien cómo sucede y qué tanto afecta a las familias mexicanas lo establecido en la legislación, se requiere hacer estudios que nos indiquen cómo viven las familias de personas que adquieren una pensión de esta naturaleza y cómo esa nueva situación de salud impacta sus economías.

La segunda adecuación tiene que ver con los requisitos para el registro de beneficiarios. De acuerdo con la Ley del Seguro social, las personas que un trabajador o trabajadora puede registrar como beneficiarias para adquirir servicios de atención médica son:

1) Cónyuges o Concubinarios.

2) Hijos e hijas menores de 16 años o hasta los 25 en caso de no poder mantenerse o estar estudiando.

3) Hijos e hijas que padezcan enfermedad crónica o tengan alguna discapacidad hasta en tanto no desaparezca la discapacidad.

4) Los hijos mayores de dieciséis años de los pensionados por invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, que se encuentren disfrutando de asignaciones familiares, así como los de los pensionados por incapacidad permanente.

CC 4.0 2021. Academia Interamericana de Derechos Humanos
https://www.academiaidh.org.mx/revista-akademia

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
http://www.juridicas.unam.mx/ https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/

5) Madre o padre que vivan en el hogar del trabajador.

Pareciera que esta redacción abarca un núcleo familiar básico y tradicional, pero ¿qué pasa con el resto de modelos de familia? De acuerdo con el artículo 4 constitucional párrafo IV y artículo 2 de la Ley del Seguro social el derecho a la salud debe estar garantizado por el Estado y la protección de la seguridad social para las y los trabajadores debe extenderse a sus familiares. La citada ley enlista una serie de relaciones familiares que están incluidas dentro del régimen de protección del trabajador o trabajadora y que, de manera implícita, excluye a todas aquellas que no estén listadas ahí, lo cual es inconstitucional pues afecta el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al cuidado de las personas con discapacidad si tomamos en cuenta que la Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que existen distintos tipos de familia y que las personas tienen la más amplia facultad de elegir libremente de qué manera se compondrán sus núcleos familiares.

Así es que tal determinación resulta violatoria del derecho al libre desarrollo personalidad pues solamente permite que el trabajador pueda asegurar a familiares del núcleo tradicional de la familia, es decir, solo protege el parentesco entre padres e hijos y el que nace del vínculo matrimonial, dejando totalmente fuera aquellas personas que deciden no formar una familia con fines reproductivos y/o de relación paterno/materno filial.

En este sentido, la exclusión que hace la ley de las distintas composiciones familiares de las y los trabajadores pone en un estado especial de vulnerabilidad a las personas con discapacidad que no formaron una familia dentro del marco de la llamada familia tradicional ya que, en estos casos asumen su cuidado otros miembros familiares que merecen tener protección de la seguridad social de la que goza el trabajador o trabajadora debido a la naturaleza de la atención prestada.

De acuerdo con el artículo 19 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, las personas con disca-

CC 4.0 2021. Academia Interamericana de Derechos Humanos
https://www.academiaidh.org.mx/revista-akademia

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
http://www.juridicas.unam.mx/ https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/

pacidad tienen derecho a decidir dónde, cómo y con quién vivir. Asimismo, el Estado debe proporcionar una serie de servicios de asistencia, incluida la de tipo personal, para facilitar su existencia e inclusión en la comunidad.

Asimismo, el planteamiento legislativo no es compatible con el modelo social de la discapacidad puesto que indica qué sucede si la persona discapacitada no puede mantenerse, pero omite señalar qué sucede cuando la persona discapacitada no es dependiente económico sino por el contrario, es quien asume los gastos de manutención de su persona y de otras personas. El precepto en mención contempla que una persona con discapacidad puede ser beneficiaria de un asegurado o asegurada cuando no puede mantenerse por motivo de su discapacidad, pero no contempla el supuesto de asegurar a las personas cuidadoras independiente de su filiación o parentesco. Reforzando así estereotipos que presumen que las personas discapacitadas siempre serán dependientes de otros.

Al no permitir la incorporación a los servicios médicos de las y los cuidadores de personas con discapacidad como beneficiarios independientemente del parentesco que tengan, el Estado incumple con su obligación de garantizar el derecho a la asistencia personal para las personas con discapacidad.

Para ejemplificar los problemas que esta cartera tan reducida de beneficiarios puede traer, les expongo el caso de una mujer que sufrió parálisis total de sus extremidades a la edad de 40 años. Cuando su discapacidad comenzó ella vivía con su madre, un hermano y una prima que había venido a vivir con ellos debido a un problema familiar. Sus hermanas, ya casadas todas, asumieron parte de sus cuidados durante el día, pero su cuidado nocturno lo asumió su prima, pasaron 20 años y poco a poco la responsabilidad de cuidado fue pasando más y más a la prima hasta el punto en que ella es quien pasa las 24 horas del día a su lado.

El problema es que su cuidadora de cabecera dejó la actividad laboral para dedicarse al cuidado y hoy en día no cuenta con nin-

CC 4.0 2021. Academia Interamericana de Derechos Humanos
https://www.academiaidh.org.mx/revista-akademia

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
http://www.juridicas.unam.mx/ https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/

gún seguro médico, ni prestación, lo que significa que si llegara a enfermar sería la persona con discapacidad quien asumiría los gastos. Además, si la mujer con discapacidad llegara a fallecer su cuidadora, no tendría derecho a recibir ninguna pensión y quedaría en total desamparo. ¿Quiénes asumen la labor de cuidado de las personas con discapacidad en México? La mayoría de veces, las familias, particularmente las mujeres del núcleo familiar, pero si estas relaciones de cuidado no están integradas en un modelo básico de esposos, padres e hijos, no pueden acceder ni siquiera al seguro médico.

Así se considera que una buena adecuación a la ley que protegería, en parte, el derecho a los cuidados de las personas con discapacidad es la posibilidad de registrar como beneficiarios a sus cuidadores, independientemente del parentesco, siempre y cuando no sean cuidadores a sueldo porque en ese caso tendrían que garantizarles todas las prestaciones que como trabajadoras o trabajadores les correspondería. Es decir, cuando uno o varios integrantes de la familia asumen la labor de cuidado de una persona con discapacidad que tiene acceso a la seguridad social, ellos también deberían poder ser beneficiarios del asegurado o asegurada.

La tercera adecuación que puedo identificar tiene que ver con el número de años de trabajo, hablamos ahora del retiro. Un trabajador o trabajadora se puede retirar por cesantía en edad avanzada y vejez. Los requisitos son:

1) Tener 60 años cumplidos.

2) Haber cotizado 1,250 semanas (aproximadamente 24 años de trabajo).

Ahora, en el momento socio histórico actual, es un hecho notorio que las personas con discapacidad sufren exclusión y discriminación, lo cual les genera problemas para conseguir empleo, de hecho, en la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2015 el 70% de la población con discapacidad estaba desemplea-

CC 4.0 2021. Academia Interamericana de Derechos Humanos
https://www.academiaidh.org.mx/revista-akademia

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
http://www.juridicas.unam.mx/ https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/

da (Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2020). El alto índice de desempleo puede traducirse en comenzar la vida laboral a una edad madura y provocar que las personas con discapacidad que accedan a un trabajo formal deban retirarse después de los 60 años para ajustar el número de semanas cotizadas o simplemente no aspirar a una pensión.

A manera de conclusión debe decirse que las barreras que enfrentan las personas con discapacidad están en todos lados y que es importante comenzar a problematizar desde todas las dimensiones que sean posibles. A partir de las reflexiones anteriores se considera que el modelo mexicano de la seguridad social no está garantizado para todas las personas con discapacidad en el país y, las que sí tienen acceso a este se enfrentan con que dicho modelo no considera sus necesidades cotidianas de la relación con sus cuidadores o cuidadoras, permitiendo aquí que se abra la puerta a un debate sobre si se les debe permitir a las personas con discapacidad registrar beneficiarios saltándose el requisito del parentesco establecido en la legislación, pues existen muchos tipos de familias y si un familiar asume el cuidado de la persona discapacitada sin ser hija (o). padre, madre, cónyuge o concubina (o), debe tener de todas maneras el derecho a registrarse cuanto y más si debido a esa labor de cuidado la persona dejó de percibir ingresos y prestaciones, generando además una relación de dependencia económica con la persona discapacitada.

Continuando con las conclusiones del modelo de seguridad social, también se advierte que este no permite que gocen efectivamente de sus derechos como trabajadores pues su diseño no contempla la capacidad como condición social sino como una condición individual valorada únicamente en relación con la "utilidad" de la persona para el trabajo. Así que es importante pensar en un modelo que sea incluyente y que tenga apertura para crear mecanismos que permitan subsanar las problemáticas que aquí brevemente se expusieron.

CC 4.0 2021. Academia Interamericana de Derechos Humanos
https://www.academiaidh.org.mx/revista-akademia

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
http://www.juridicas.unam.mx/ https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/

Bibliografía:

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2020): *Informe de Actividades 2020. Personas con Discapacidad.* CNDH México. Disponible en: «*http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=95*» [Consultado el 5 febrero 2021].

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014): La discapacidad en México, datos al 2014: versión 2017 (2017 th ed.). Inegi. Disponible en: «*https://www.inegi.org.mx/contenido/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825094409.pdf*»

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021): *Censo 2020*, Inegi. Disponible en: «*https://www.inegi.org.mx/temas/discapacidad/*» [Consultado el 31 de enero de 2021].

Turner, John Kennet (2014): *México Bárbaro*, Grandes de la Literatura Editores Mexicanos Unidos, México.

CC 4.0 2021. Academia Interamericana de Derechos Humanos
https://www.academiaidh.org.mx/revista-akademia